

9. EL ARGUMENTO TELEOLÓGICO: LAS CONSECUENCIAS Y LOS PRINCIPIOS.

Juan Antonio García Amado

I. Herramientas y definiciones.

Comenzaré por explicitar la concepción del Derecho y de su interpretación, a la que me adscribo. Seguidamente precisaré algunos de los términos o expresiones de los que me valdré a lo largo de estas páginas.

Me sumo a la que llamo concepción lingüística del Derecho. Es aquella que ve el Derecho como un conjunto de enunciados dotados de significado (más o menos determinado) y provenientes de ciertas instancias o fuentes “reconocidas” como productoras de normas por el propio ordenamiento jurídico y, en última instancia, por la sociedad que se trate.

El significado de esos enunciados señala los límites externos o el marco de lo que en Derecho puede establecerse en cada momento. Cuando estemos ante un Estado de Derecho Constitucional y Democrático y que mínimamente funcione como tal, añadido que esos significados ponen el límite externo o marco de lo que en Derecho puede legítimamente establecerse en cada momento.

Que la materia prima del Derecho sean enunciados no significa ni que esos enunciados tengan que ser perfectamente exentos de indeterminación semántica ni que, por tanto, no haya nada que añadir a esa materia prima a efectos de resolver los casos en sede de enjuiciamiento judicial. Y tampoco quiere decirse que dichos enunciados cubran todos los casos posibles. El conjunto de esos enunciados válidos y/o aplicables (no es ese el asunto aquí y podemos evitarnos los matices) ni resuelve todos los casos ni los resuelve unívocamente y con plena determinación. Lo que la concepción que defiendo sostiene es tan sólo que no es aplicación del Derecho¹ la resolución de un caso contra lo dispuesto en lo que de determinado haya en un enunciado jurídico positivo válido y/o aplicable. Por tanto, vulnerar un enunciado jurídico positivo (es decir, decidir lo que según su semántica -en conjunción con la sintaxis y la pragmática, por supuesto-) en nombre de cualesquiera otros valores, principios, reglas de otros sistemas -moral, religión...-, cálculos, etc. no es aplicar Derecho ni decidir en Derecho².

1. Y que en un Estado de Derecho no es, además, legítimo proceder así.

2. Y, además, en un Estado de Derecho es ilegítimo.

Puesto que la inmensa mayoría de los enunciados legales no son ni totalmente determinados ni totalmente indeterminados, es posible atribuirles más de uno y menos de infinitos significados. Más cuanto más indeterminados, menos cuanto menos indeterminados. Pero al que no sea totalmente indeterminado no se le puede atribuir cualquier significado. La frontera de los significados posibles la marca la semántica. Puede ser una frontera un poco permeable, pero hay frontera. Si de hecho se correlaciona con un enunciado un significado que desdice totalmente de su semántica, no se está interpretando, se estará haciendo cualquier otra cosa, que se puede llamar como se quiera. Y si luego ese significado se aplica a la resolución de un caso, no cabe decir con propiedad que se ha aplicado aquel enunciado legal así interpretado. Se ha aplicado un enunciado inventado gratuitamente para el caso.

Por tanto de todo enunciado legal caben varias interpretaciones posibles: tantas como no sean incompatibles con su semántica.

La teoría normativa de la interpretación jurídica intenta dar criterios (métodos, cánones) para dirigir la elección entre las interpretaciones posibles. Aquí los llamaré argumentos interpretativos. En cada momento y cada cultura jurídica está sustancialmente acotada la lista de los argumentos interpretativos admisibles, que quedan, así, diferenciados frente a otros posibles pero no admisibles. Los argumentos interpretativos admisibles lo son por su habitualidad (son tópicos, en el sentido de Viehweg) y por su sustrato valorativo, es decir, por ser susceptibles de justificación con base en algún valor que se considera esencial para el sistema jurídico y jurídico-político.

La utilización de un argumento interpretativo admisible da lugar a una interpretación justificada. Una interpretación justificada es aquella que se apoya en un argumento interpretativo admisible y bien utilizado en el caso. Un argumento interpretativo admisible está bien utilizado cuando se dan en su uso las siguientes condiciones: i) Los datos que se invocan son pertinentes; ii) los datos que se invocan son verdaderos, o, si son de tal tipo que su verdad no puede demostrarse, verosímiles o probables; y iii) sus datos o premisas demostrables se saturan hasta donde sea razonablemente posible.

Puede ocurrir, y así es a menudo, que las interpretaciones justificadas sean varias. En ese caso se necesitan pautas o directivas de un grado más alto para dirimir la elección entre las interpretaciones justificadas. Aquí es donde entran en juego las que llamaré reglas interpretativas.

Reglas interpretativas son las que sirven o bien para eliminar

interpretaciones posibles (que pueden ser también interpretaciones justificadas), en cuyo caso son reglas interpretativas negativas, o para establecer preferencias entre interpretaciones posibles (que pueden ser también interpretaciones justificadas), en cuyo caso se trata de reglas interpretativas positivas. En suma, las reglas de interpretación dirimen elecciones entre interpretaciones (justificadas) posibles.

Algunos de los que suelen ser recogidos como cánones de la interpretación pertenecen a este conjunto de las que llamamos reglas de la interpretación. Por tanto, dentro de los cánones o criterios de interpretación estamos diferenciando entre argumentos interpretativos y reglas interpretativas. Ambos tienen que ser admisibles en el sentido que dijimos antes para los argumentos. La admisibilidad de las reglas deriva, igualmente, de su habitualidad (tópicos) y de su sustrato valorativo, es decir, su servicio o funcionalidad para valores o bienes que se consideran consustanciales de nuestros ordenamientos jurídicos.

Con base en lo anterior, partimos de las siguientes reglas de la interpretación, esenciales a nuestra concepción del Derecho y su práctica pero que no puedo justificar aquí más extensamente:

R.1: El intérprete debe elegir una interpretación de entre las posibles.

R.2: El intérprete debe elegir, de entre las posibles, la/una interpretación que esté justificada.

R.3: i) El intérprete debe elegir, de entre las interpretaciones posibles, la/una que esté justificada y que no quede excluida por una regla interpretativa negativa.

ii) El intérprete debe dar preferencia a la(s) interpretación(es) posible(s) que esté(n) respaldada(s) por una regla interpretativa positiva.

En lo que sigue me referiré al juego del argumento teleológico, por un lado, y de la regla interpretativa positiva de maximización de las consecuencias positivas, por otro.

II. El argumento teleológico.

El argumento teleológico tiene dos variantes, teleológico-subjetiva y teleológico objetiva.

Definición del argumento teleológico-subjetivo: está justificado dar a los enunciados legales el significado que (en mayor grado) permita alcanzar el fin (o los fines) que con ellos quiso su autor.

Definición de argumento teleológico-objetivo: está justificado dar a los enunciados legales el significado que (en mayor grado) permita

alcanzar el fin (o los fines) que una persona razonable hoy querría lograr al formular tales enunciados.

Los resultados de aplicar una u otra de esas dos variantes pueden ser coincidentes o divergentes. Es fácil que coincidan cuando la norma es reciente y democráticamente creada; pueden no coincidir cuando faltan esas dos notas.

La estructura de ambas variantes del argumento es idéntica (al menos en lo que aquí nos importa), aunque sean diversos los datos con que hayan de rellenarse los apartados de esa estructura argumentativa. Esa estructura común puede describirse así³:

Si el significado S de un enunciado legal permite (en la mejor medida posible) el cumplimiento del fin de dicho enunciado, está justificado asignarle ese significado S.

Esto es:

$F_n (S_n F_n) JS_n$

El empleo racional de este argumento requiere la justificación suficiente de las dos aserciones que componen su antecedente: que el fin de n es F (F_n) y la implicación entre el significado S y el cumplimiento de dicho fin ($S_n F_n$).

i) La atribución a n del fin F, y no por ejemplo del fin F', F''...
Fⁿ.

El tipo de justificación requerido depende de la variante del argumento que se esté utilizando. Cuando se trata del teleológico-subjetivo serían de enunciados históricos. El esquema del enunciado finalístico aquí es: “el legislador L quiso para la norma n el fin F”. La adecuada justificación de dichos enunciados (y con ello de la primera parte del argumento) requiere que a) dichos enunciados existan; b) que sean expresamente fundados en datos coherentes y suficientes; c) que esos datos sean verdaderos o, al menos, que no se demuestre su falsedad.

3. Cabría plantearlo en términos negativos, como hacen Koch y Rissmann. Su esquema de este argumento, adaptado a nuestros términos, quedaría así (vid. Koch/Rissmann, p. 216).

(1) OF_n

(2) $\neg S_n \rightarrow \neg F_n$

(3) OS_n

Cuando se trata de la variante teleológico-objetiva este asunto es aun más complicado, pues pueden mezclarse enunciados normativos y empíricos, dependiendo de los matices o variaciones con que, a su vez, este argumento teleológico suele aparecer. Tomemos sólo dos de sus modelos más usuales:

a) A veces se caracteriza diciendo que el fin que debe guiar la interpretación de los enunciados legales es el que una determinada sociedad, a día de hoy, unánime o mayoritariamente les daría. Por tanto, el esquema aquí es: “Esta sociedad S quiere para la norma n el fin F”. Aquí se trata de afirmaciones empíricas que tienen que estar sostenidas por los correspondientes datos o indicios suficientemente acreditados; el esfuerzo demostrativo de la verdad de esos datos tendrá que ser tanto mayor cuanto menor sea la evidencia de la verdad de lo afirmado. No es igual de evidente afirmar “en esta sociedad todos aspiran a tener una buena vivienda” que afirmar “en esta sociedad todos son partidarios de que el Estado subvencione las confesiones religiosas”.

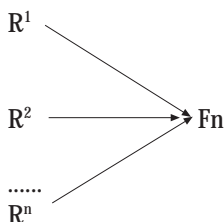
b) Otras veces se caracteriza diciendo que el fin que debe guiar la interpretación de los enunciados legales es el que una (cualquier) persona razonable les daría. En la medida en que el sujeto al que se imputa esa preferencia entre fines no es un sujeto real y empírico, sino uno hipotético y construido con datos normativos, resulta crucial la fundamentación que se proponga para estos últimos. Es decir, se parte de una definición de sujeto razonable (o cualquier sinónimo) y habrá que justificar de modo suficiente y suficientemente convincente los datos de esa definición. No es lo mismo definir como sujeto razonable, a estos efectos, al que posee una psicología propia de adulto que al que respeta las reglas de un determinado sistema moral. Cuando esto último ocurriera estaríamos ante el tan frecuente uso del argumento teleológico-objetivo para la imposición dogmática y camuflada de un determinado código moral con pretensiones de “objetividad”.

Sea cual sea la variante, subjetiva u objetiva, quiere decirse que la afirmación F_n sólo estará justificada cuando en el razonamiento interpretativo que la contenga se expliciten las razones en que se apoya. Es una cuestión gradual: el argumento será tanto más fuerte (y la correspondiente interpretación resultante tanto más justificada) cuanto más y mejores (menos discutibles o dudosas) sean esas razones. Las mismas podrán ser empíricas (históricas, sociológicas, psicológicas...) o normativas (morales, políticas...). Sólo es prescindible sin daño de la racionalidad argumentativa la explicitación de aquella razón de total evidencia, indiscutible.

Podemos representarlo así:

$(R^1 R^2 \dots R^n) \rightarrow F_n$

O así:



ii) En segundo lugar, el empleo racional de este argumento requiere la demostración o fundamentación suficiente de la implicación causal que contiene, la afirmación que la aplicación de la norma n con el sentido S tiene como efecto o consecuencia el cumplimiento del fin F_n .

El pleno desarrollo argumentativo de ese extremo en el contexto de un razonamiento interpretativo en que se sopesen diversas interpretaciones posibles (y, en su caso, justificadas), supone algo más que el mero mostrar que de la aplicación de la norma n interpretada con el significado S se sigue la realización del fin F . Porque pudiera ocurrir que de otro significado S' se pudiera mostrar también que se sigue la realización del fin F , o incluso una realización en más alta medida.

Por tanto para la justificación racional del argumento interpretativo teleológico, es decir, para su correcto uso, tiene que quedar suficientemente claro y fundado que sólo la interpretación de n con el significado S permite la realización del fin F_n ; o que ese es el significado que permite una mejor realización de F_n . En consecuencia, es argumentativa y racionalmente deficiente el uso de este argumento con la mera justificación de que $S_n \rightarrow F_n$. Esto es condición necesaria, pero no suficiente. También se ha de acreditar que ninguna otra interpretación de S_n lleva a la realización de F_n .

Pongamos que las interpretaciones posibles en litigio sean S^1_n y S^2_n . Ha de quedar suficientemente justificado que:

- (1) $S^1_n \rightarrow F_n$
- (2) $S^2_n \rightarrow \neg F_n$

Si queremos ser aun más minuciosos y precisos debemos reparar en que los contenidos totales del razonamiento serían así (uso C por “consecuencia”, en el sentido de efecto).

- (1) $S^1n \quad C$
- (2) $S^2n \quad C'$
- (3) $C \quad Fn$
- (4) $C' \quad \neg Fn$
-
- (5) $S^1n \quad Fn$

Son necesarios, pues, razonamientos de corte empírico, generalmente prospectivos o probabilísticos. Podemos establecer la siguiente regla para estos razonamientos en cuanto parte del correcto uso del argumento interpretativo teleológico:

Tendrán que ser tanto más y/o mejores las pruebas o indicios que expresamente se aporten en favor de la implicación causal entre S_n y F_n cuanto menos evidente o indiscutible sea dicha implicación.

El reverso de esta regla, o su complemento, es la exigencia de que en la misma medida tiene que quedar suficientemente justificado que dicho efecto de realización de F_n no se sigue (o no se sigue en tal medida) de $S^1n...S^nn$.

Estamos, pues, ante necesarios razonamientos de ponderación de consecuencias: muestran qué consecuencias se siguen de cada interpretación en litigio y, segundo paso, se justifica cuál de esas consecuencias se corresponde mejor con la realización del fin del enunciado legal interpretado⁴.

III. La regla de maximización de las consecuencias positivas.

Puede darse también el caso que el fin del enunciado legal se realice aplicándolo con distintos significados, si bien tal regulación acontecería en grado diverso por cada uno. Es decir, podríamos estar ante una situación como esta:

- $$\begin{array}{l} S^1n \quad Fn^{+1} \\ S^2n \quad Fn^{+2} \\ S^3n \quad Fn^{+3} \end{array}$$

4. Dejo de lado aquí el análisis de los casos en los que sean varios los fines que se han adscrito al enunciado legal, ya se trate de fines que se hayan de alcanzar alternativa o acumulativamente. No se me escapa que son los supuestos más complejos, pero considero que para ellos vale, con esa mayor complicación de análisis y argumentación, lo que en general afirmo.

Parece bastante obvio que la ratio del argumento teleológico nos llevaría a todos a la preferencia de S^3n , es decir, de aquella interpretación que en más alta medida realiza el fin del enunciado legal. Las interpretaciones que satisfacían la definición del argumento interpretativo teleológico (está justificado dar a los enunciados legales el significado que permita la realización de su fin) son varias, pero preferimos una. ¿Por qué la preferimos?. Porque aplicamos una regla de interpretación que podemos formular así: de entre las interpretaciones posibles se debe elegir la que lleve a las mejores consecuencias. Llamaré a esta regla interpretativa regla interpretativa de maximización de las consecuencias positivas (en adelante RMC). De la RMC sostendré en lo que sigue tres cosas: i) que es la ratio del argumento teleológico y donde tiene una aplicación más evidente; ii) que a la RMC se puede traducir, un tanto trivialmente, pero de modo útil a efectos analíticos, la ratio de todo argumento interpretativo; y iii) que la RMC no sólo constituye la ratio peculiar de cada argumento interpretativo, sino que conforma también, en un metanivel sobre los anteriores, la más importante directiva de segundo grado o regla directora de la interpretación entre interpretaciones posibles justificadas, es decir, de preferencia de una u otra interpretación en cada caso. Recordemos que los argumentos interpretativos justifican interpretaciones y las reglas interpretativas señalan preferencias o exclusiones entre las interpretaciones justificadas. Con ello veremos que, contrariamente a lo que se suele escribir, lo que la teoría de la interpretación necesita no es una jerarquización entre los argumentos interpretativos (cánones...), sino una regla con la que sentar su orden en cada caso. Tal sería la función de la RMC.

Vayamos por partes.

i) Todo argumento interpretativo admisible recibe esta última condición de su sustrato valorativo. Un argumento interpretativo es siempre un punto de vista, un criterio, una escala desde la que se ofrece una determinada referencia, pauta u óptica a cuyo tenor dar un significado a un enunciado legal. Un argumento interpretativo le dice al intérprete que puede atenerse a X a la hora de asignar un significado a la norma. Los distintos argumentos interpretativos se diferencian según lo que pongan en el lugar de X : lo que el legislador quiso decir, lo que el legislador quiso conseguir (fin), lo que es razonable querer conseguir o lo que la mayoría querría conseguir, etc.

Pero en ninguna sociedad y en ninguna cultura jurídica se admite cualquier pauta al efecto, cualquier canon de todos los posibles e imaginables. Pensemos en un canon teleológico que nos dijera que está justificado dar al enunciado legal el significado que sea acorde con la voluntad de Dios. En otro tiempo pudo tener y tuvo (y en otros

lugares tiene) plena vigencia y operatividad; entre nosotros, aquí y ahora, no lo contamos entre los argumentos interpretativos admisibles. ¿Por qué?. Porque su sustrato valorativo, la razón por la que se considera bueno (que los preceptos humanos se atengan -o al menos no contradigan- la voluntad divina) es rechazable en nuestra cultura jurídica por incompatible con presupuestos valorativos básicos en nuestros sistemas jurídico-políticos, tales como el pluralismo, la libertad de conciencia e ideológica, la aconfesionalidad del Estado, etc.

Pensemos ahora en el argumento interpretativo teleológico. ¿Por qué es tenido por admisible?. Creo que todos coincidiríamos en explicaciones muy parecidas al respecto. En su versión subjetiva se invoca el valor positivo de respeto al legislador, considerado el único o supremamente legitimado para dictar las pautas normativas de nuestra vida en común. En su versión objetiva se alude a cosas tales (según las subvariantes que antes señalamos, de entre las posibles) como el respeto al sentir de la sociedad en cada momento o a la racionalidad práctica de la institución jurídica.

Así pues, la ratio del argumento teleológico es que resulta bueno, deseable, que el fin de la norma se cumpla, por lo que dicho cumplimiento supone la realización del respectivo valor que funciona como sustrato del argumento (obediencia al legislador, a la sociedad...). Pues bien, si tal cumplimiento del fin es bueno, se presupone, al tiempo, que tal cumplimiento del fin debe darse en la mayor medida posible. Por tanto, y como ya sabemos, de entre todas las interpretaciones posibles se debe optar, en la aplicación del argumento teleológico, por la que tenga consecuencias que en medida mayor realicen dicho fin. Ahí está funcionando la RMC interna al argumento teleológico. Y así, como luego veremos, funciona en todos, pues a todos subyace la siguiente regla: es preferible siempre y en todo caso la mayor realización de V, siendo V el valor o valores que conforman el sustrato valorativo del argumento.

Si llamamos Z a “la más alta posible realización del fin de la norma -Fn-” podemos representar así el juego aquí de RMC:

- (1) $S^1n \text{ } Fn^{+1} \text{ } (S^2n \text{ } Fn^{+2}) \text{ } (S^3n \text{ } Fn^{+3}) \text{ } OZ$
- (2) $F_n^3 = Z$
- (3) OZ

ii) La RMC opera en todo argumento interpretativo, pues todo argumento interpretativo tiene en su fondo un valor (o varios interrelacionados) y el presupuesto que se debe optar, de entre todas las interpretaciones posibles que con ese argumento se pueden justificar,

por la que suponga la realización mayor de ese valor. Pensemos en el argumento interpretativo sistemático, aunque sea sin entrar en grandes matices. El sustrato valorativo de este argumento, en todas sus variantes, alude siempre a los valores enlazados de coherencia lógica y consistencia lingüística. Pues bien, traduciendo al lenguaje de la RMC este argumento diríamos que de entre las interpretaciones que eviten incoherencias y/o inconsistencias se debe elegir aquella que maximice ese objetivo.

Un ejemplo sencillo. Pongamos que S^1n da lugar a una antinomia total-total con otra norma n' del sistema, que S^2n da lugar a una autonomía parcial-parcial con n' , y que S^3n no da lugar a ninguna antinomia. En aplicación de la RMC el orden de preferencia que se debe imponer entre estas tres interpretaciones posibles es S^3 , S^2 , S^1 .

Vemos así que el llamado canon o argumento de interpretación lógico-sistemática, que dice que se debe optar por la interpretación, de las posibles, que mejor evite las antinomias con otra norma, no es en realidad un argumento sino una regla, y que, en realidad, es una subregla o aplicación parcial de la regla de RMC.

¿Cuál es la diferencia de este ejemplo de aplicación de RMC con su funcionamiento en el argumento teleológico?. Que en este argumento sistemático la justificación argumentativa de las consecuencias que se derivan de cada interpretación y de cuál es la que mejor realiza el valor de fondo del argumento echará mano de argumentos lógicos y lingüísticos (semánticos, sintácticos, pragmáticos), mientras que en el argumento teleológico esas razones serán de índole principalmente empírica y, sobre todo, probabilística.

iii) La RMC funciona, además, como metaregla con la que dirimir la preferencia entre interpretaciones justificadas con distintos criterios. La doctrina repite siempre que distintos argumentos interpretativos o cánones pueden presentar como justificadas, respectivamente, distintas interpretaciones y que, además, cada uno de ellos puede dar lugar a varias interpretaciones justificadas. Esto último se evitará en muchos casos (no siempre) mediante la aplicación interna de RMC al respectivo canon, como acabamos de ver. Lo otro se puede solventar en muchos casos, no siempre, con la aplicación externa o como metaregla o regla de decisión interpretativa última de RMC. En esta función RMC podría enunciarse así:

De entre todas las interpretaciones posibles y justificadas se debe elegir aquella cuya aplicación tenga las mejores consecuencias.

Llamemos interpretaciones justificadas a $S^1... S^n$ y M a la

interpretación justificada que tiene las mejores consecuencias. Tenemos que:

$$(S^1 \ S^2 \ \dots \ S^n) \text{ OM.}$$

Todo esto suena perfectamente trivial si no añadimos rápidamente que el quid del asunto y la fuente de todas las divergencias se encuentran en el patrón de medida de las consecuencias. Al fin y al cabo, lo que hasta aquí vengo diciendo es que, una vez que asumimos qué es lo bueno, todos estaremos de acuerdo en que de lo bueno aquí cuanto más, mejor. ¿Pero cómo sabemos lo que es bueno?. En el caso de la aplicación interna de RMC a los distintos argumentos interpretativos admisibles se trabaja sobre la base de un consenso social muy firme y a tenor del cual poca discusión existe sobre que es bueno que se obedezca al legislador, que se salguarde la coherencia del sistema, que se garantice que las normas son eficientes para sus objetivos, etc. El problema, como es bien sabido, se torna mucho más serio cuando todos o algunos de esos valores chocan y hay que optar por una determinada interpretación de entre las que están, respectivamente, justificadas por unos u otros de ellos. Se suele pensar, ya lo he dicho, que el problema debe resolverse, si es que se puede, mediante jerarquías estables de esos valores, lo que es tanto como decir, de los respectivos argumentos interpretativos. Así es como, por ejemplo, para unos cuenta más la eficiencia de la norma para las necesidades actuales que la obediencia a las intenciones prácticas o semánticas del legislador, y para otros al contrario.

Por tanto, mientras no salgamos de ese marasmo la RMC no nos sirve de nada, pues nos diría meramente que se debe elegir la interpretación que mejor realice el valor que hayamos elegido como superior, y así sucesivamente en la escala, hacia abajo. Si queremos que RMC tenga la función cierta de metaregla minimamente efectiva hemos de darle un anclaje más sólido y objetivo a la pauta de jerarquización de las consecuencias justificadas.

A partir de los años setenta en Alemania hubo una fuerte corriente doctrinal propugnadora de la colaboración de las ciencias sociales en la práctica jurídica, tanto legislativa como judicial. En la literatura iusmetodológica alemana, en ese marco, cobró cierta fuerza la llamada doctrina de la “orientación por las consecuencias” (Folgenorientierung) o “consideración de las consecuencias” (Folgenberücksichtigung). También se habla de “interpretación orientada a las consecuencias” (folgenorientierte Auslegung). Pero la concepción allí dominante se diferencia de mi propuesta en lo siguiente: propugna que el intérprete se guíe por la consideración de las consecuencias sociales de su decisión. Se trataría de analizar los efectos sociales de

la decisión y de optar por la que los tenga mejores. Aquel análisis podría y debería echar mano de las herramientas proporcionadas por las ciencias sociales. Es más, las ciencias sociales constituyen incluso el mejor auxilio para establecer cuáles son los estados de cosas más deseables o justificados en la sociedad y ofrecen, por tanto, la pauta con la que jerarquizar las preferencias. Aquel optimismo de las ciencias sociales (sociología, psicología social, estadística...) se perdió en gran medida en las décadas inmediatamente siguientes, pero en ciertos ámbitos su lugar lo ocuparon las doctrinas del análisis económico del Derecho. Estas adoptan como pauta general de valoración de las normas y de las decisiones jurídicas el criterio económico de coste-beneficio y sobre tal base consideran posible graduar la preferencia de las opciones decisorias. A más caro, peor, podríamos decir, simplificando, que es su criterio.

Hay en todo eso varias diferencias con la teoría que propongo.

i) En primer lugar, muchos de esos autores estarían dispuestos a defender que la escala de valores que sienta la economía o cualesquiera otras ciencias vale más que la escala de preferencia manifestada por el legislador mediante los términos y enunciados de sus leyes, de modo que, en caso de conflicto (conflicto que existe entre dos determinaciones, no entre lo claro y lo indeterminado, no se pierda esto de vista) entre ambas jerarquías, la “científica” debe prevalecer. Es decir, si el mandato del legislador (en lo que sea claro y no caiga en la “zona de penumbra”) es claro pero caro (o contrario a la opinión pública del momento del caso, o que supone un riesgo para ciertos estados psicológicos colectivos, etc.) debe ceder ante las consecuencias mejores de decisiones que le son contrarias (contra legem). En lo mismo andan algunos rehabilitadores de la razón práctica en el Derecho, que estiman que cuando las consecuencias de toda decisión de un caso acorde con el mandato legislativo son de grave injusticia deben evitarse tal injusticia y decidirse contra el tenor del mandato legislativo. Son doctrinas paralelas, pues ambas creen en la objetividad y cognoscibilidad de una verdad práctica distinta del Derecho y por encima de él. Se diferencian en la fuente de la que abrevan: aquéllos en las ciencias sociales; éstos en las éticas cognoscitivistas. Caben también síntesis de ambas fuentes, al estilo habermasiano.

Frente a lo anterior, aquí defiendo que en un Estado de Derecho Constitucional y Democrático no se debe rebasar el límite de las interpretaciones posibles y que, por lo mismo, la escala de preferencias que el legislador ha trazado prevalece para el juez⁵

5. Y en tanto que juez, supongo que nadie me saldrá aquí con la cantinela del positivismo ideológico, que no viene en absoluto a cuento porque i) la desobediencia puede estar éticamente justificada, por supuesto, pero aquí no estamos hablando de ética individual sino de lo que conviene a ese medio de organización colectiva que es

absolutamente sobre cualquier otra, ya la proporcione la ciencia, la ética o la religión. Pero quede claro que también para aquellos partidarios de las ciencias sociales o de la razón práctica opera una regla de maximización de las consecuencias favorables, sólo que, repito, sus contenidos y escala los fijan las ciencias o la razón práctica, no el Derecho, y, por lo mismo, pueden usarse incluso contra legem.

ii) ¿Significa lo anterior que pretendo aplicar una RMC al margen de las ciencias o, si acaso, de cualquier rastro de racionalidad práctica?. No. Para acabar de perfilar (en lo posible) mi propuesta faltan tres precisiones: a) el propio ordenamiento jurídico establece

las pautas o referencias con las que poder en muchas ocasiones medir las consecuencias de las decisiones interpretativas; b) las pautas establecidas por el propio sistema pueden y deben prevalecer (en el Estado de Derecho) contra las extrasistemáticas, vengan de donde vengan; c) las ciencias sociales -y hasta las naturales- pueden y deben ser usadas para respaldar los juicios probabilísticos en que se correlacionen interpretaciones posibles, consecuencias y fines preferibles; d) allí donde el propio sistema no dé indicaciones mínimamente definidas y útiles para fundar la preferencia de unas u otras consecuencias, o donde las dé contradictorias y no haya jerarquización posible para el caso (que es lo más común), o allí donde aunque esté clara la escala de las consecuencias sea imposible pronosticar con un mínimo rigor el acaecimiento de unas u otras, nos hayamos en supuestos de discrecionalidad judicial pura y simple, e inevitable. Será lícito al juez decidir según sus valores y fundamentar del modo mejor posible la aplicación de los mismos; no lo será, en cambio, que intente presentar como conocimiento objetivo lo que sólo puede ser de su cosecha.

Explicaré brevemente algunas cosas de estos puntos anteriores.

El ordenamiento jurídico positivo contiene numerosos enunciados que, en lugar de la habitual estructura de supuesto de hecho/consecuencia jurídica, o en lugar de la atribución de algún género de competencias o poderes, se limitan a proclamar la deseabilidad de ciertos fines o estados de cosas. De esas proclamaciones están bien repletas las Constituciones, aunque no sólo. Así es como se declara deseable según nuestro Derecho que todos tengamos un trabajo, una vivienda digna, un medio ambiente limpio, una administración de justicia

el Derecho; ii) no estoy diciendo que todo Derecho sea justo por el hecho de ser Derecho, sino que todo juez, y en tanto que actúe como juez, carece de legitimidad para reemplazar los valores democráticamente anclados en la ley por sus valores, por muy verdaderos que considere los suyos y muy descartados que vea a la mayoría democrática o al legislador que la representa; sí puede un juez, y es éticamente loable también, dimitir o practicar la desobediencia civil, pero a cara descubierta, no como uso alternativo del Derecho. El uso alternativo del Derecho es digno de alabanza y propio de democratas en un Estado autoritario o totalitario, pero reprochable y propio de antidemócratas en un Estado de Derecho.

independiente, una infancia protegida, etc. El viejo positivismo a la Kelsen consideraba estos enunciados meras proclamaciones literarias sin apenas valor jurídico. Por contra, muchos de los actuales “constitucionalistas” y antipositivistas las tienen por la columna vertebral del sistema jurídico y la razón de ser de sus mandatos, y cuanto más indeterminadas, mejor.

Lo que defiendo, y no es nada original, es el valor interpretativo de dichas cláusulas, en cuanto que proclaman fines por relación a los que medir las consecuencias respectivas de las interpretaciones posibles y justificadas de cada enunciado jurídico. Así, entre dos interpretaciones justificadas cada una por un (o varios) argumentos interpretativos admisibles, la RMC impone que se elija aquella que mejor realice aquel de estos fines jurídicamente sentados que entre en juego. Un ejemplo muy simple: si de dos interpretaciones posibles de una norma resulta que una provocaría la consecuencia que más personas accedieran a una vivienda digna y otra que menos, y si no hay ningún otro principio de igual jerarquía en liza, deberá darse preferencia a la primera, en aplicación de RMC.

Cuando, como es muy común, sean dos o más de ellos los que vengan al caso y estén en conflicto en él, no sirve gran cosa lo que estoy diciendo y hay que desarrollar reglas de optimización para las que no es este el lugar.

Esos que llamo enunciados jurídicos teleológicos tienen utilidad como pauta de fijación de fines para la aplicación de la RMC en función de dos de sus características: su jerarquía y su nivel de concreción.

Con su jerarquía aludo al lugar que ocupe en la jerarquía de fuentes el documento que contenga el respectivo enunciado teleológico: la Constitución, una ley, etc. El fin superior prevalece sobre el inferior. La protección de la familia o del medio ambiente, proclamados como objetivos en la Constitución, deberán pesar más que la protección de la confianza en el tráfico mercantil, por ejemplo⁶.

6. Un ejemplo jurisprudencial. Un empresario “entra” en el ordenador de un empleado en la empresa y examina los mensajes que éste ha recibido y enviado. Lo hace sin mandato judicial. Se plantea la cuestión de si medida semejante se justifica conforme al Art. 20.3 LET, que otorga al empresario las competencias de control y vigilancia sobre la actividad laboral de sus trabajadores y el uso de los medios empresariales (a favor de esta tesis, STS SS Cataluña 5 jul. 2000, País Vasco 31 oct. 2000, Galicia 4 oct. 2001, Madrid 4 dic. 2001...), o si, por el contrario, supone una vulneración del Art. 18.3 CE, que protege el secreto de las comunicaciones (en este sentido STS SS Andalucía 25 feb. 2002, Madrid 31 enero 2002). (Vid. Sent. del Juzgado de lo Social nº 32 de Barcelona de 16 sept. de 2002, que acoge esta última tesis) (archivo SENTIUM®). Mi tesis coincidiría con esta última postura jurisprudencial, pues entre dos fines se opta por el establecido en la norma superior. Es un ej. más de interpretación favorable a los ds.fs.

Al hablar de su concreción me refiero al grado en que los contenidos semánticos del enunciado teleológico en cuestión estén determinados. A mayor determinación, cuanto menor su zona de penumbra, mejor utilidad como base de una aplicación objetiva de RMC. El fin que todos puedan tener un puesto de trabajo es mucho mas preciso y, por tanto, determinable en su grado de cumplimiento, que el que todos sean poseedores de una dignidad. Un enunciado teleológico completamente abierto no establece ningún fin (sólo el que el intérprete libremente guste darle) y por tanto, no sirve como pauta por referencia a la cual medir las consecuencias de las interpretaciones en liza.

La jurisprudencia, con base en esos enunciados teleológicos, suele formular reglas interpretativas más precisas, las cuales son concreciones de aquéllos y se usan para dirimir entre interpretaciones dentro de distintas áreas temáticas del Derecho. Así es como nacen, se justifican y funcionan reglas interpretativas como la de favor laboratoris en Derecho Laboral, favor minoris en Derecho de Menores, etc. No son argumentos interpretativos, sino reglas de interpretación y subreglas de la metaregla de maximización de las consecuencias positivas.

GUÍA DE LECTURA No. 9.

Curso: Interpretación y Argumentación Jurídica.

Texto: El argumento teleológico: las consecuencias y los principios.

Autor: Dr. Juan Antonio García Amado.

OBJETIVOS.

Después de la lectura y desarrollo de la presente guía, el capacitando deberá:

- ü Conocer el significado de algunas definiciones relativos a la aplicación del método o argumento teleológico.
- ü Identificar las variantes de aplicación del método teleológico.
- ü Conocer los requisitos de la aplicación adecuada del método teleológico.
- ü Aplicar adecuadamente en la interpretación de disposiciones legales las variantes del método teleológico.

INDICACIONES.

Realice una lectura minuciosa del texto en referencia, responda a las preguntas que se le formulan y a las actividades propuestas.

ACTIVIDADES.

Desarrolle el cuestionario siguiente:

1. ¿Cuál es la visión del Derecho que sostiene la “concepción lingüística” a la que se adscribe el autor?.
2. ¿Cuál es la “frontera” de los significados posibles en la interpretación?.
3. ¿Cuáles son los criterios de los que depende la admisibilidad de los argumentos interpretativos?. ¿Le parecen suficientes?.
4. ¿Qué se entiende en el texto por una interpretación justificada?.

5. Explique los requisitos que debe tener la correcta utilización de un argumento interpretativo admisible.

6. Señale la utilidad de las reglas interpretativas.

REGLA INTERPRETATIVA	UTILIDAD
Regla interpretativa negativa	
Regla interpretativa positiva	

7. ¿Cuáles son las dos variantes del argumento teleológico?.

8. ¿Cuál es la “estructura común” de ambas variantes del método teleológico?.

9. ¿Cuáles son los dos requisitos (“aserciones que componen su antecedente”) que debe cumplir la adecuada utilización del método teleológico?. Ejemplifique con un caso.

10. Señale cómo se atribuye el fin a la norma en las dos variantes del método teleológico.

VARIANTE DEL MÉTODO	ASIGNACIÓN DEL FIN
Teleológico-subjetivo	
Teleológico-objetivo (modelo de “determinada sociedad”)	
Teleológico-objetivo (modelo de “persona razonable”)	

11. Proporcione dos ejemplos de utilización del método teleológico por cada una de las variantes de aplicación. Utilice disposiciones legales para ello.

12. ¿Qué significa la regla de maximización de las consecuencias positivas en la aplicación del método teleológico?.

13. Explique en sus palabras las siguientes afirmaciones:

Ø Todo argumento interpretativo admisible recibe esta última condición de su sustrato valorativo.

Ø La regla de maximización de las consecuencias opera en todo argumento interpretativo.

Ø La regla de maximización de las consecuencias funciona como metaregla.